

Impacto en la economía local tensiona definición sobre Enjoy

V. DEL MAR. Consejo resolutivo de Superintendencia de Casinos resolverá mañana si acepta su salida anticipada, que dejaría a la ciudad con US\$ 200 millones menos.

Sebastián Mejías O.
 sebastian.mejias@mercuriovalpo.cl

El futuro no sólo del Casino de Viña del Mar, sino también de la economía comunal y de las arcas municipales, se juega en una cita clave este jueves, cuando el Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos resuelva si acepta o no la solicitud de Enjoy para renunciar a la licencia en 2028, aun cuando el contrato estipula que su extensión está vigente hasta 2036.

La preocupación es que si se aprueba esta salida anticipada, generaría una merma económica estimada en 200 millones de dólares para las arcas municipales, que se suma a un impacto considerable en la economía local, y los cerca de mil puestos de trabajo que están en peligro.

Todo depende de lo que decida el Consejo Resolutivo, que está compuesto en su mayoría por actores afines a las políticas del Gobierno y del Frente Amplio, como el gobernador Rodrigo Mundaca; la subsecretaria de Hacienda, Heidi Berner; la subsecretaria de Turismo, Verónica Pardo; más la subsecretaria de Desarrollo Regional (Subdere), Francisca Perales. Además, está la presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero, Solange Bernstein.

Sobre lo que pase este jueves, el diputado Diego Ibáñez (FA) advirtió que "lo más importante hoy es proteger el empleo y el futuro de Viña del Mar", consciente que "más allá de los beneficios empresariales, lo que está en juego son los cerca de mil puestos de trabajo del Casino Municipal".

Asimismo, apuntó también contra la empresa a cargo de las operaciones, señalando que "el cambio en las reglas del juego, promovido por la Superintendencia, favorece a Enjoy pero pone en riesgo la estabilidad de quienes trabajan ahí y los ingresos históricos que el casino genera para el desarrollo local".

En una visión similar, el senador PS, Tomás De Rementería, emplazó directamente a la Superintendencia, convencido que "lo natural sería que la Superintendencia de Casinos y la comisión tuvieran una posición clara

"¿Quién responde por estas decisiones? ¿Quién defiende el interés público cuando los intereses privados logran reescribirse a medida?"

Macarena Ripamonti
 Alcaldesa de Viña del Mar

sobre el tema de Enjoy".

A su juicio, "no puede ser que las empresas concesionarias que profitan de una licencia pública, puedan renunciar así tan simplemente y hacer juegos económicos, y después tratar de conseguir, con otra razón social, la licencia nuevamente".

INESTABILIDAD JURÍDICA

Para el diputado Arturo Barrios (PS) estamos ante "una situación muy compleja porque puede incidir y afectar la institucionalidad actual, generando inestabilidad jurídica". Incluso, advierte, "podría suceder que nuevos concesionarios usen el mismo argumento y no asuman sus responsabilidades de largo plazo".

Para Andrés Celis, diputado RN, el escenario no sólo es incierto, sino una amenaza para el turismo local, lamentando "que el concesionario tome esta determinación", porque "todo acto que ponga en jaque el buen funcionamiento de este establecimiento es una mala noticia".

Por ahora, espera "que esta situación tenga un final conforme a lo que la ley dicta, pero que en ningún caso constituya una merma en la calidad de servicio que presta el casino a la ciudad y, por sobre todo, que no sea una causa de disminución del potencial turístico de Viña y la región".

EVENTUAL NUEVA LICITACIÓN

En el Concejo Municipal este tema se discutió ayer, con la edil Nancy Díaz (FA) que planteó que "no se puede aceptar la renuncia, esto sería un precedente para otros casinos", mostrando su pesar ante la eventualidad de perder ingresos que "van en directa mejora a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad".

Su compañero de tienda, Alejandro Aguilera, fue más categórico al reprochar que a "Enjoy le falta al compromiso con Viña del



PESE A TENER CONTRATO HASTA 2036, ENJOY PIDIÓ DEJAR LICENCIA EN 2028.

Mar, con su desarrollo y con su futuro", añadiendo que "este traje a la medida es un cambio en las reglas, ni siquiera a la mitad del partido, sino al inicio, y muestra que la Superintendencia no ha sido capaz de cuidar los intereses históricos de nuestra comuna".

Lo central, advierte, "es cuidar a los trabajadores y trabajadoras del Casino". "Los cerca de mil puestos de trabajo deben protegerse, junto a todos sus históricos beneficios", recalca.

Mientras que en la oposición, Antonella Pecchenino (P. Republicano) calificó como "muy compleja" la decisión de Enjoy, "ya que parte importante del presupuesto municipal depende de dichos ingresos". Y si bien sabe que se puede "realizar una nueva licitación", también reconoce que "seguramente será menos favorable para el municipio, lo que debería traducirse no en una falta o disminución de servicios para la ciudad, sino en una mejora en la administración de los recursos".

Su par, el concejal republicano Andrés Solar, no esconde su preocupación y deja claro que, de aprobarse la salida anticipada, "lo que debería pasar es que desde el minuto siguiente planificar una nueva licitación, pero priorizar generar las mejores condiciones posibles para poder tener en 3 años más una licitación que sea económicamente conveniente".

Por su parte, Antonia Scarella (indep./UDI) advirtió que una salida anticipada de Enjoy "no sólo pone en riesgo nuestras finanzas municipales, sino tam-

bién el bienestar y calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas". Una decisión que, de ser favorable a Enjoy, cree, "debilitaría la confianza en las reglas del juego establecidas por ley", y de ahí que espera "que el Consejo Resolutivo actúe con responsabilidad y piense en el bienestar de la ciudad y de sus habitantes".

ES UNA PREGUNTA ÉTICA

Consultada por el tema, la alcaldesa Macarena Ripamonti dice que le "cuesta comprender cómo una de las comunas más relevantes para la economía de Chile, una ciudad que aporta al país más de lo que recibe, ha sido constantemente excluida de las grandes decisiones nacionales".

Hoy, subraya, la ciudad enfrenta "una acción inaceptable", al permitir, "por vía reglamentaria, que un actor privado renuncie anticipadamente a una concesión millonaria sin perder un solo día de operación, mientras se habilita, sin contrapeso, un rediseño del mercado del juego que podría costarle al Estado, y particularmente a Viña del Mar, más de \$200 mil millones".

Ante este escenario crítico para la ciudad, Ripamonti plantea una pregunta que, recalca, "no es técnica, sino ética". "¿Quién responde por estas decisiones? ¿Quién defiende el interés público cuando los intereses privados logran reescribirse a medida?", se cuestiona, haciendo un llamado a que "las autoridades que deben tomar la decisión en el Consejo Resolutivo espero tengan esto presente".